

Estabilidad por autogobierno

Santos Juliá, El País, 18/01/1998

El ritual de gestos y palabras que antecede, acompaña y sigue a las visitas del presidente de la Generalitat al del Gobierno les confiere un carácter muy singular. Normalmente, Jordi Pujol recuerda, antes de emprender viaje, sus discrepancias de fondo con el Gobierno, que suele situar en el terreno de la idea de España y el concepto de Cataluña. Esta toma de distancia filosófica se refuerza dando libre curso a los rumores sobre el malestar reinante en sectores de su coalición por la continuidad del acuerdo. Así acentuadas las dificultades, el presidente de la Generalitat se carga de razón cuando termina su discurso presentando el balance de lo conseguido: sumado todo, 107.902 millones; además, el traspaso del Inem y del tráfico, la supresión de los gobernadores y la ley de Puertos.

Esos 108.000 millones constituyen un argumento inapelable contra sus críticos de casa; si no hubiera mantenido el acuerdo, no se habrían conseguido. Pero llamar tan expresamente la atención sobre el dinero, cuantificando las diferentes partidas y sabiendo que corre el riesgo de ser interpretado en Madrid como un vulgar "fenicio", es una advertencia dirigida también al Gobierno: si queréis renovar el pacto, les viene a decir, ya sabéis el precio. No es un mensaje subliminal, un sobreentendido. Pujol lo explicita recordando el infinito camino que queda aún por recorrer: "Aspiramos a una estructura distinta de España", afirma. Y como sabe que si pone "por delante cambiar la estructura del Estado de acuerdo al cien por cien con nuestro concepto de Cataluña y de España" el rechazo sería total, no tiene inconveniente en bajar el precio de su apoyo desde el cielo filosófico de los conceptos al suelo de la más prosaica realidad: "Hemos hecho aportaciones suficientes para pedir a Aznar más autogobierno". A cambio de garantizar la continuidad del Gobierno, el presidente de la Generalitat exige incrementar su presupuesto, lo que es decir su poder.

Eso es así por una insoslayable realidad política: de los diputados nacionalistas catalanes depende la posibilidad de que el presidente del Gobierno español cumpla el término completo de la

legislatura para la que fue investido. Tratándose de una coalición nacionalista -y no de un partido bisagra, que hoy da mayoría a la derecha, mañana a la izquierda sin mayores complicaciones ideológicas- la única justificación de tal apoyo consiste en mostrar a sus electores las ventajas contables obtenidas sin modificar un ápice la "idea" de España y Cataluña; sin renunciar, por tanto, a ese cambio de la estructura del Estado evocado en la última entrevista concedida a *La Vanguardia*. Son ventajas que valen, desde luego, por lo que cuentan y lo que suenan -de ahí que Pujol sume las diferentes partidas- pero que valen, sobre todo, porque se sitúan en un punto más avanzado de un recorrido de lejanos, casi infinitos horizontes.

Alguna gente nerviosa ha propuesto acabar con esta situación por la vía quirúrgica de la reforma electoral. Empeño vano y, además, erróneo en su presunción de que los diputados nacionalistas pesan más que sus votantes. No es así: CiU obtuvo en las pasadas elecciones el 4,6% de votos y tiene el 4,6% de diputados. El sistema electoral es, con ellos y con el PNV, exactamente proporcional; no les beneficia, como al PP y al PSOE, ni les perjudica, como a IU. No es, por tanto, con artificios electorales como se podrá garantizar la vida de un gobierno sin supeditarla al trueque anual de estabilidad por presupuesto. El único camino sería definir de una buena vez las competencias de cada cual, pero eso no lo quisieron los padres de la Constitución ni lo quieren los partidos nacionalistas. Y así, las visitas se repetirán y la estabilidad tendrá siempre el precio de más autogobierno hasta el día en que, realizada por fin la "idea" de Cataluña y España, el Gobierno sea tan estable, tan estable, que ya no le quede ninguna competencia que transferir.

"España es mejor"

Santos Juliá, El País, 10/05/1998

Como transcurrieron dos meses desde su corto triunfo electoral hasta su laboriosa llegada al Gobierno, los fastos conmemorativos del momento en que las cosas empezaron a ir bien en España les tienen entretenidos una sexta parte del año. Desde el 3 de marzo, cuando se pone en marcha el festejo con una entrevista del presidente a la prensa amiga evocando la efeméride electoral, hasta el 3 de mayo, cuando se cierra el recuento de los aciertos gubernativos con una entrevista-bis a la prensa amiga-bis, no paran de restregar, un día sí y otro también, que el periodo de seguridad, capacidad, tranquilidad, confianza, estabilidad, prosperidad, europeidad, de que disfruta España se debe en exclusiva a este Gobierno bajado de los cielos para inaugurar la historia.

Dos meses de pompa y circunstancia resumidos en un mensaje al alcance de todos los españoles. Si hasta el 3 de marzo el lema era "España va bien", desde el 3 de mayo hemos cambiado a "España va mejor". Mensaje igualmente conciso, construido con las más probadas técnicas publicitarias, pues repite machaconamente el sujeto, España, España: cambia el verbo aunque conserva el monosílabo, es por va; y sustituye sin salir de la misma familia los predicados, bien por mejor, para que quede tan solo la duda de si España es la mejor o de si España es mejor que antes. Dos años nos hemos pasado con los oídos castigados por el alegre repicar del España va bien; dos añitos que nos quedan de escuchar la linda cantata de que España es mejor.

Pero toda esta deplorable propaganda no puede ocultar un hecho de fondo. El Gobierno ha sido más hábil en buscar aliados políticos y apoyos mediáticos de lo que aparenta la huería retórica de sus portavoces más autorizados. Las concesiones a sus socios nacionalistas le han valido una solidaridad sin fisuras de CiU, un ahí me las den todas del PNV y la seguridad de que podrá alcanzar el final de la legislatura sin mayores sobresaltos parlamentarios. Por el lado de los medios, la venta de un sabroso bocado de lo que todavía quedaba del más rentable patrimonio público ha reforzado su posición en el entramado empresarial del mundo de la

comunicación. A los dos años de su llegada, el Gobierno no tiene problemas con sus aliados en el Parlamento y goza de una envidiable benevolencia en prensa, radio y televisión, con algunos medios bajo su directo control y felices de entregarse a su más descarada apología.

Contando con esos apoyos políticos y mediáticos, el Gobierno ha lanzado una iniciativa susceptible de despertar la curiosidad, si no las simpatías, entre las clases medias bajas y altas simultáneamente: evitar a millones de ciudadanos la presentación del impreso del impuesto sobre la renta, con el mensaje implícito de que la gente con menos ingresos nada debe ni nada paga al fisco; y recortar el tipo marginal máximo, con el mensaje explícito de que quienes ingresan más altos salarios no se verán penalizados por un fisco insaciable. Ese amplísimo sector de asalariados, que o se librerá de la ventanilla o se ahorrará unos miles de duros, va a ser desde el próximo martes el terreno en disputa para iniciar la caza del voto.

A estas alturas, los asalariados ubicados políticamente entre la izquierda del centro y el centro de la derecha pueden desplazar sin mayor quiebra de identidad su posición, movidos por razones contantes y sonantes. Ante lo fluido de ese magma centrista, se abre la oportunidad de plantear por vez primera un debate político sobre la fiscalidad; pues mientras los técnicos discuten de inversión pública y de financiación de las prestaciones sociales, los liberados del engorro de presentar papeles y los aliviados por la rebaja estarán atentos a lo que tenga que decir un partido que, por boca de su Ejecutiva, ha esgrimido el brillante argumento de que este Gobierno detrae a los pobres para darlo a los ricos. O la oposición aclara sus intenciones o mucha gente acabará creyendo que si España no es mejor, sí será mejor que se quede como está.

Caídos en desgracia

Santos Juliá, El País, 15/11/1998

Iniciaron su mandato como si procedieran de la peor tradición de la derecha española, la que considera que los derrotados carecen de derecho a la existencia política; la que tiene a la oposición como una forma de patología que es preciso extirpar. Numerosos funcionarios y cargos públicos que habían prestado servicios al Estado con gobiernos socialistas lo comprobaron en sus carnes: expulsados de los despachos, si no a la calle, a los pasillos; reducidos a una especie de vida vegetal con sus mesas vacías de papeles, por ver si en un brote de amor propio tomaban ellos mismos la decisión de dejar el campo libre. Aquel intento de someter con una agresión continua a quienes se consideraba no adictos impregnó de un color gris plomizo la alborada de la nueva era prometida.

Junto a la estrategia de liquidación de adversarios, el Gobierno popular se mostró muy hábil en la ocupación de todos los resortes de mando que una larga tradición de Estado clientelar, reforzada por los socialistas, pone a disposición de los gobernantes de turno. Un masivo cambio de manos sacudió a todas las esferas de poder, desde las modestas subdirecciones generales de los ministerios a las pingües presidencias de las grandes empresas públicas, pasando por televisiones, emisoras de radio, museos, hospitales, cajas de ahorro y tantas otras bagatelas como arrastra en su estela el ancho navío del presupuesto público. Era la mejor manera de mostrar que, además de tomar venganza con el adversario, a los adictos se les garantizaba un prometedor futuro.

La única duda que quedó por resolver era si aquel alarde de agresividad y malos modos se debía sencillamente a que por fin la derecha mostraba su verdadera faz o a que lo consideraba la mejor estrategia para alcanzar la ansiada mayoría. Cascos hostigando al adversario o extirpando los conatos de disidencia, Rodríguez liderando ofensivas mediáticas y López-Amor convirtiendo los noticieros en lo más cercano a los partes ministeriales que hayamos presenciado nunca, igual podían ser la expresión de una manera de hacer política que las maniobras de una fiel infantería con la misión de dejar el campo listo para los pulcros reconstructores. Sólo el

tiempo podía despejar la incógnita.

Y el tiempo ha llegado ya de comprobar que el agrio clima extendido al inicio de la legislatura era parte de una estrategia destinada a provocar un respiro de alivio cuando, una vez el territorio conquistado y con el adversario en plena desbandada, se procediera a repartir en lugar de hostias, sonrisas. Erraron quienes juzgaron la caída de Rodríguez como un mero lavado de cara. Cierto, lavado hubo y hasta afeitado: cada vez que se enciende la televisión y aparece el portavoz, un aroma de agua de lavanda invade todos los hogares de España. Pero con ese olor ha cambiado la táctica del juego; todo son ahora educadas maneras al servicio de otra política para la que ha sido preciso sacrificar a los rompehuesos del primer tiempo.

Es admirable la santa resignación con la que aceptan los depurados su caída. No se vea en esto ningún signo de virtud sino la habilidad que el presidente del partido ha adquirido en la tarea de limpiar sin agraviar. Ya pasó con los veteranos de UCD cuando recibieron, tras su desembarco en el PP, el agradecimiento por los servicios prestados en forma de presidencia de alguna empresa pública. Ahora pasa con estos esforzados luchadores que engrosan las filas de un partido con un plantel de veteranos satisfechos por el estatus adquirido, y por las presidencias ocupadas, y que ofrece a jóvenes ambiciosos amplio campo que labrar, grandes expectativas que colmar. Con el viento de la economía soplando todavía de popa, los impuestos a la baja, los sindicatos en calma y el País Vasco sin bombas, su próximo congreso será la celebración adelantada de esa mayoría hasta ahora esquiva que los caídos en desgracia saludarán con manifestaciones de lealtad y media sonrisa en los labios.